

Las marchas contra la violencia

Por Mauricio Archila. Historiador, profesor titular de la Universidad Nacional -sede Bogotá-, investigador asociado del CINEP.
marchila@cinep.org.co

Algunos medios masivos de comunicación han presentado como una novedad las recientes marchas contra la violencia, especialmente la del 4 de febrero,¹ pues la del 6 de marzo no fue tan publicitada.² Más allá del desigual impacto mediático que pudieron tener, conviene preguntarse por la novedad que ellas encierran, pues como veremos –apoyados en la Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP–, no es cierto que por “primera vez” los colombianos y las colombianas se hayan movilizado contra la violencia. A nuestro juicio la novedad de estas protestas radica en la cantidad y sobre todo en la calidad, es decir, en el número de participantes y en el mensaje proclamado. Expliquémonos.

Como es difícil hacer cálculos acertados de la cantidad de participantes en una u otra, señalemos simplemente que fueron multitudinarias, especialmente la del 4 de febrero. Sin duda ésta tuvo más cubrimiento territorial (nacional e internacional), resultado que en parte se explica por tener mayores recursos, amplia propaganda y contar con el aval gubernamental para movilizar a funcionarios públicos en el país y en el exterior, elementos que escasearon en la del 6 de marzo. Otro factor que influyó en la primera movilización fue la indignación causada por las dramáticas “pruebas de supervivencia” de los secuestrados conocidas a comienzos de año. En cambio la del 6 de marzo, además de tener que superar serias limitaciones logísticas, se dio bajo el doble signo de estigmatización desde altos voceros del gobierno y de amenaza por parte de grupos paramilitares.³

**...no es cierto que por
“primera vez” los colombianos
y las colombianas se hayan
movilizado contra la
violencia...**

¹ Por ejemplo, el editorial de *Vanguardia Liberal* del 4 de febrero decía: “La historia registra muy pocos casos de verdaderas movilizaciones alrededor de causas compartidas por un número de ciudadanos” y solamente reseñaba la “Marcha de las antorchas” de Gaitán (y no la del Silencio), las Caminatas de la Solidaridad organizadas por doña Nidia Quintero y la “Marcha del silencio” a raíz del asesinato de Guillermo Cano (pág. 6 A).

² Basta un somero recorrido por los titulares al otro día de las respectivas marchas para constatar el desigual tratamiento periodístico. Sobre la primera *El Tiempo* dijo: “Un grito del Sahara a la Patagonia” y “La marcha que pasará a la Historia” (5 de febrero, págs. I 4 y 5), en cambio para la segunda lacónicamente tituló: “Víctimas se hicieron sentir, marcharon en paz en varias ciudades del país (...) Las mujeres fueron grandes protagonistas” (7 de marzo, pág. I 2). Si la primera mereció editoriales de casi todos los periódicos, la segunda no.

³ Amenazas que están ejecutando las Águilas Negras contra los marchistas del 6 de marzo, según información de *El Espectador* (23-29 de marzo, pág. 2 A).

También enrareció su desarrollo la gran tensión nacional e internacional fruto de la incursión de las fuerzas armadas colombianas contra un campamento de las Farc ubicado en la frontera ecuatoriana en la madrugada del 1 de marzo, ataque militar que dio como resultado la muerte del miembro del Secretariado, alias Raúl Reyes, y de una veintena de "guerrilleros" (incluso no se sabe a ciencia cierta aún si todos lo eran). Con todo, al menos en Bogotá, tuvo una gran magnitud y fue muy rica en términos simbólicos. No sobra recordar que la del 4 de febrero, más que una marcha como tal, fue una concentración en puntos estratégicos de las grandes ciudades colombianas a medio día, mientras la del 6 de marzo fue una movilización que retomó, para bien y para mal, el ritual de las protestas de la oposición. Ambas contaron con una proyección internacional similar.

Si bien el número de participantes cuenta, por si solo no basta para causar un impacto político como el que tuvieron las marchas aludidas. Por ello es necesario analizar la calidad del mensaje proclamado, en lo que hay que proceder con cautela para no caer en la trampa mediática de decir que por "primera vez" los colombianos y las colombianas protestaron contra la violencia. Para no irnos a tiempos remotos, baste recordar las múltiples protestas que en los años ochenta y noventa acompañaron los funerales de los militantes de la Unión Patriótica y de dirigentes sociales y políticos de oposición; el Mandato por la Paz y las marchas del "No más" a finales del siglo pasado; los actos de "resistencia civil" y las "mingas" indígenas, así como las movilizaciones de la Ruta Pacífica de Mujeres en lo que va del presente siglo; para no hablar de la caminata del profesor Moncayo el año pasado y la más reciente de los policías discapacitados. Aunque las consignas no son siempre las mismas, tienden a predominar la denuncia de la guerra y sus nefastos efectos en la población civil, al igual que la búsqueda de la paz.

Las pasadas marchas no fueron homogéneas ni químicamente puras. Hubo bastante gente que asistió a ambas y se vieron camisetas y banderas con consignas comunes...

Si miramos las estadísticas de protestas en Colombia desde 1975 hasta 2007 que reposan en la respectiva Base de Datos del CINEP, es claro que el tema de respeto a los Derechos Humanos y al DIH no es algo nuevo en el país. Por supuesto que ha aumentado en los últimos tiempos a la par con la degradación del conflicto armado. Si en el largo periodo entre 1975 y 2007 ese tema motivó el 17.5% de las luchas sociales, en lo que va corrido de este nuevo siglo (2000-2007) esa proporción aumentó al 27.9% –el solo reclamo por el derecho a la vida, la integridad y la libertad tuvo el 18.7% del total–. Se convierte así en la principal causa de movilización nacional por encima de demandas clásicas laborales, por la tierra o por servicios públicos domiciliarios.

Si la demanda por la vigencia de Derechos Humanos y del DIH como tal no es novedosa en el país, se nos dirá que lo nuevo en las pasadas marchas radicó en la denuncia precisa en contra de los actores armados: las Farc en una y los paramilitares y agentes del Estado en otra. Pero esto tampoco es del todo cierto, pues muchas protestas en los últimos años se han librado contra los "señores de la guerra" designándolos con nombre y apellido. Según la aludida Base de Datos de Luchas Sociales, todos los grupos armados irregulares fueron adversarios del 11% de las protestas entre 1975 y 2007, cifra que aumenta a 21% en lo que va corrido de este siglo. De manera desagregada en este último periodo (2000-2007), la

insurgencia fue la clara antagonista del 4.1% de las luchas sociales, mientras los paramilitares fueron el 1.8% y las bandas delincuenciales el 0.6%; el resto (14.6%) corresponde a grupos armados irregulares sin discriminación. En consecuencia, tampoco es cierto que por "primera vez" la gente en Colombia haya marchado para denunciar a uno u otro actor armado o a todos en general. Entonces, ¿en dónde radica el impacto político que ellas pudieron causar?

Más allá de la gran cantidad de participantes, aspecto que cuenta, el mensaje de las recientes marchas significa también alguna novedad. Lo que en una y otra se expresó fue la indignación ciudadana contra los actores armados. Si bien hubo diferente énfasis en las denuncias, predominó un sentimiento de rechazo a la violencia y todas sus secuelas. Independientemente de quién las perpetre, la gente está cansada de secuestros, desapariciones, asesinatos, masacres, minas antipersonales, ataques a poblaciones o actos terroristas y, en general, de todas las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Cada vez más la población colombiana clama por el fin de un conflicto que, aunque se hace en su nombre, no ha reportado nada bueno sino muerte y destrucción. Claro está que hay diferencias en la forma de acabarlo: hasta la época de los diálogos en el Caguán la mayoría se inclinaba por una salida política, con su estruendoso fracaso la balanza se inclinó por la solución militarista propuesta por Álvaro Uribe Vélez. Pero llevamos ya casi seis años de su prolongado mandato y no se vislumbra el fin de la guerra.

...el conflicto armado en Colombia no sólo ha curtido la piel de los combatientes enfrentados, sino también su ética. En el juego de la guerra las partes terminan pareciéndose...

La duración y sobre todo la degradación de la guerra interna ha producido este rechazo en amplias capas de la población colombiana. Y es que el conflicto armado en Colombia no sólo ha curtido la piel de los combatientes enfrentados, sino también su ética. En el juego de la guerra las partes terminan pareciéndose.⁴ Bien lo señala el conocido historiador británico Eric Hobsbawm al hablar en su último libro sobre las guerras en este siglo: "Esta degeneración patológica en violencia política afecta tanto a los insurrectos como a las fuerzas estatales".⁵ Ese cansancio con una guerra cada vez más degradada es el gran mensaje que dejan las pasadas marchas.

⁴ Antonio Caballero denunció en pasada columna que el recurso del actual Gobierno a la manida fórmula de "todo vale" para derrotar al enemigo, no es sino una reedición de la "combinación de todas las formas de lucha" usada históricamente por derechas e izquierdas en el país. "El todo vale es indefensible en la teoría, desde la ética", continúa el columnista. "Muchas veces he citado la brillante frase del escritor R. H. Moreno Durán según la cual 'el aforismo que dice que el fin justifica los medios no tiene principios'. Inevitablemente, los medios corrompen el fin, como lo han corrompido en el caso de la guerrilla (...) Los medios innobles no pueden llevar un fin noble" ("El todo vale", *Semana*, marzo 10 de 2008, pág. 131).

⁵ *Guerra y paz en el siglo XXI*, Barcelona, Crítica, 2007, pág. 137. Un ejemplo patético de esta degeneración de la violencia política fue el asesinato de otro miembro del Secretariado de las Farc, Iván Ríos, por su jefe de seguridad, quien para cobrar la recompensa le cortó la mano al cadáver de su ex jefe. Si bien se trata de un caso aislado, es ilustrativo de hasta dónde puede llegar el deterioro moral en las filas de la insurgencia y, al mismo tiempo, pone de nuevo en discusión el tema de los medios y fines en la guerra de este gobierno contra las Farc. Claro que por el lado de los paramilitares los casos de degeneración moral no escasean, como lo mostró el brutal enfrentamiento entre los hermanos Vicente y Carlos Castaño, que terminó con el asesinato del último; y aún en las filas oficiales hay signos de esta degradación como ocurrió en las masacres de Guaitarilla y Jamundí, al enfrentarse a muerte diversas fuerzas armadas estatales.

Queda un último aspecto por analizar en ellas. Continuamente se dijo que se las quiso politizar en un intento de manipulación para obtener adeptos hacia uno de los extremos en los que se quiere polarizar al país. Veamos con más detalle este punto. En cuanto a los argumentos de la “politización” de las luchas sociales, la Base de Datos del CINEP muestra que ellas cada vez esgrimen argumentos más políticos. Ya señalábamos que el tema de derechos representó el 17.5% de los motivos de las protestas entre 1975 y 2007, a los que se agregan los reclamos propiamente políticos y por autoridades que ocuparon el 19.8% en ese periodo. Esto arroja la cifra de 37.3%, que representa más de la tercera parte del total de las luchas en ese largo periodo. En lo que va corrido de este siglo (2000-2007) la proporción aumenta al 55%, más de la mitad del total. Por tanto, el tema político no es nuevo en la dinámica de las protestas en el país y cada vez es más visible.

...“no queremos ninguna guerra (ni interna ni externa) en nuestro nombre”...

Otra cosa es la instrumentalización partidista que se quiere hacer de las movilizaciones. Si bien ella se ha dado desde tiempos remotos, por parte de izquierdas y derechas, y es inevitable hasta cierto punto,⁶ la gente la resiste, construye alianzas pragmáticas según los contextos locales y regionales, y defiende a capa y espada su autonomía. Eso se observa a lo largo y ancho del territorio y se puede constatar en la narrativa de la gran mayoría de las protestas, al menos desde que hay registros históricos.⁷ Aunque hubo intentos de manipulación antes y después de que ocurrieran las pasadas movilizaciones, los colombianos y colombianas que marcharon no “tragaron entero”. Ni la una se puede interpretar como un cheque en blanco a Uribe y menos a su nueva reelección, ni la otra se puede leer como un respaldo a la insurgencia. A este respecto es dicente una consigna que se esgrimió en ambas marchas: “no queremos ninguna guerra (ni interna ni externa) en nuestro nombre”.

Obviamente que más allá de este mensaje común hay diferencias políticas en el seno de las multitudes que acudieron a las calles el 4 de febrero y el 6 de marzo, asunto nada despreciable en la polarización que vive Colombia. La existencia de estas diferencias, e incluso los discutibles respaldos que pudieron dar los paramilitares a la primera y las Farc a la segunda, no justifican que se las haya querido estigmatizar y menos descalificar, como lo hicieron sectores extremos de uno u otro lado del espectro político colombiano. Las pasadas marchas no fueron homogéneas ni químicamente puras. Hubo bastante gente que asistió a ambas y se vieron camisetas y banderas con consignas comunes. En la del 4 de febrero aparecieron pancartas que llamaban al Acuerdo Humanitario y en la del 6 de marzo no faltaron las voces contra el secuestro. La pluralidad de mensajes en las movilizaciones es de por sí un ejercicio práctico de convivencia ciudadana. Claro que esa pluralidad tuvo límites, pues en la primera hubo consignas aisladas de tono racista y sexista, con altas dosis de violencia verbal, y en la segunda se presentaron gritos descalificadores y al final aislados choques con la policía, aspectos marginales que no demeritaron los objetivos de las marchas.

En síntesis, la novedad de las recientes movilizaciones del 4 de febrero y el 6 de marzo radica en el gran número de colombianos y colombianas que rechazan todas

⁶ *El Tiempo* así lo reconocía en un editorial del 4 de febrero: “... es inevitable que la marcha tenga un sentido político (...) Pero esto es secundario ante el significado más profundo de esta movilización” (pág. I 18).

⁷ Al respecto véase el recuento de las luchas sociales en la segunda mitad del siglo XX en nuestro libro *Idas y venidas, vueltas y revueltas, protestas sociales en Colombia 1958-1990* (Bogotá, Cinep/Icanh, 2003) y en la obra conjunta *25 años de luchas sociales en Colombia, 1975-2000* (Bogotá, Cinep, 2002).

las formas de violencia, independientemente de quien las perpetre. La indignación ciudadana expresada puntualmente en una marcha no redundo inmediatamente en mayor democracia –ninguna protesta por sí sola la crea–, pero hacia allí se orienta.